

RESOLUCION CONJUNTA M.S./M.T.E. y S.S. 5/20

Buenos Aires, 12 de agosto de 2020

B.O.: 14/8/20

Vigencia: 14/8/20

Contrato de trabajo. Discriminación laboral. Coronavirus (COVID-19). [Ley 27.541](#) y [Dtos. 260/20](#) y [297/20](#). Empleadores. No están facultados para exigir certificaciones médicas o estudios relativos a la enfermedad a los trabajadores que ingresen o se reintegren a sus tareas.

VISTO: el "EX-2020-51949954-APN-DD#MS"; las Leyes 27.541 y 26.529; y los Dtos. 351 de fecha 5 de febrero de 1979, 7 de fecha 10 de diciembre del 2019, 260 de fecha 12 de marzo del 2020 y 297 de fecha 19 de marzo del 2020; y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que por el D.N.U. 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria con causa en la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el nuevo Coronavirus (COVID-19) por el plazo de un (1) año desde la entrada en vigencia de dicho decreto.

Que a través del Dto. 297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fue prorrogada sucesivamente por los Dtos. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, y a partir de los Dtos. 520/20, 576/20 y 605/20 la medida se limitó a las jurisdicciones expresamente señaladas, rigiendo para el resto el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, hasta el 2 de agosto de 2020, inclusive.

Que la Constitución Nacional en su art. 14 establece que todos los habitantes de la Nación gozan derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita y, asimismo, en su art. 14 bis establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, entre otros.

Que la Ley 26.529 contempla como parte de los derechos esenciales en la relación entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y cualquier efector de que se trate, el de confidencialidad, considerándose que el paciente tiene derecho a que se guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente.

Que conforme el Dto. 7/19, compete al Ministerio de Salud entender todo lo inherente a la salud de la población, y a la promoción de conductas saludables de la comunidad, y al Ministerio de

Trabajo, Empleo y Seguridad Social en todo lo inherente a las relaciones y condiciones individuales y colectivas de trabajo, al empleo y a la Seguridad Social, entre otras.

Que la coordinación entre las autoridades competentes de las diferentes jurisdicciones permitirá el establecimiento de pautas de implementación para el retorno a la actividad laboral presencial en contexto de pandemia, con la debida observancia de las recomendaciones sanitarias en materia de prevención y control de la salud pública, sin poner en peligro los esquemas implementados para evitar la propagación del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) virus responsable del COVID-19.

Que en el contexto reseñado y ante diversas situaciones planteadas por los actores sociales, en torno a la exigencia de presentar certificaciones médicas o de exhibir resultados de estudios acerca de la presencia del COVID-19, cabe dar una respuesta conjunta, que aclare debidamente la cuestión, en una interpretación auténtica de la normativa reseñada, proveniente de los órganos que participaron en su creación.

Que no se desprende del ordenamiento de referencia la posibilidad de requerir certificaciones como las descritas, conducta que, por otra parte, podría colisionar con normas de superior jerarquía, que vedan la discriminación en sus diversas formas y preservan la reserva y confidencialidad de los pacientes.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos pertinentes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios 22.520 (t.o. en Dto. 438/92) y sus modificatorias y los D.N.U. 260, de fecha 12 de marzo de 2020, y modificatorios.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVEN:

Art. 1 – Establecer que la normativa dictada en el marco de la Ley 27.541 y del D.N.U. 260, de fecha 12 de marzo de 2020, no faculta a los empleadores a exigir certificaciones médicas o estudios relativos al COVID-19, a los trabajadores que ingresen o se reintegren a sus tareas.

Art. 2 – La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación el Boletín Oficial.

Art. 3 – De forma.